

## *Otros temas*

145 El perverso encanto de la corrupción. Perfil y aceptación del dictador latinoamericano

RONALDO MENÉNDEZ

150 Democratización y desigualdades en América Latina y el Caribe

LAURENCE WHITEHEAD

# El perverso encanto de la corrupción. Perfil y aceptación del dictador latinoamericano

RONALDO MENÉNDEZ  
*Escritor y Periodista*

## RESUMEN

El mapa político latinoamericano, a medida que se ha ido ‘modernizando’, nos ofrece un curioso cambio en la condición del dictador. Poco a poco las tomas de posición abiertamente antidemocráticas han cedido lugar a cierto tipo de gobernantes que opera bajo el imperativo dictatorial, enmascarados en corrupción institucional a distintos niveles. La ambición de perpetuarse en el poder funciona como un círculo vicioso: abandonarlo significaría un ajuste de cuentas con respecto a una gestión corrupta. El presente artículo contempla y describe dicho estado de cosas, pero sobre todo intenta profundizar en las causas que fomentan el fenómeno de la impunidad con respecto a este nuevo perfil del dictador latinoamericano.

**Palabras clave:** Dictador, Corrupción, Impunidad, Ambición, Democracia.

## ABSTRACT

The Latin American political map, as it has been evolving, offers us a curious change in the dictator’s condition. Little by little, the openly anti democratic position has given rise to certain types of leaders that operate under the dictatorial regime masked in several levels of the institutional corruption. The ambition to remain in power acts as a vicious cycle: to abandon this would imply settling scores with a corrupt administration. The present article shows and demonstrates this state of things, but overall, it tries to deepen the causes that promote the impunity phenomenon with respect to the new profile of the Latin American dictator.

**Key words:** Dictator, Corruption, Impunity, Ambition, Democracy.

La historia —o más exactamente, el basurero de la historia, como le gustaba decir a Marx— ha producido variopintos dictadores en todas las latitudes. Entre sus rasgos comunes está una paradójica mezcla entre el afán de hacerse querer por las multitudes, y la constante actitud represiva para perpetuarse en el poder. No obstante, el perfil del dictador latinoamericano contemporáneo ha ido desplazando la represión abierta y chapucera (al estilo de un Pinochet o un Stroessner), por una aguda capacidad para combinar la corrupción administrativa y política con la indulgencia y aceptación por parte de grandes sectores de la población, e incluso de las llamadas ‘clases instruidas’ latinoamericanas.

¿A qué se debe esta lamentable actitud de aceptación, según la cual personas bien intencionadas son capaces de, aun sabiendo los niveles de corrupción a que llega tal o cual gobernante, preferirlo en el poder por encima de los mecanismos institucionales garantes de la democracia? Revisemos en primer lugar algunos paradigmas.

Hace dos años, cuando George W. Bush visitó Lima, una fracción casi olvidada del movimiento Sendero Luminoso puso una bomba en un centro comercial ubicado frente a la embajada de Estados Unidos. Yo andaba por allí comprando tabaco, así que el azar puso mi pellejo donde no debía. Pero el yo periodista —como suelen decir los propios estadounidenses— estaba en el lugar y en el momento adecuados. Y aunque los diez muertos que dejó el atentado ante mis ojos desde el primer momento nublaron mi capacidad reporteril, tomé nota de algo curioso: desde muchos de los autos que pasaban cerca salían gritos que expresaban algo así como: “Que regrese el chino”. O sea, querían que el ex presidente, el prófugo japonés Alberto Fujimori, volviera a reinar en el Perú.

Desde entonces ha llovido mucho, aunque no en Lima donde jamás cae una gota, real y metafóricamente: según las encuestas, cada vez hay más gente que quiere “que regrese el chino”. Y eso que ya no sólo ha quedado clara la falsa nacionalidad peruana de Fujimori, sino además la suculenta corte de delincuentes de Estado que floreció bajo su mando. La pregunta obligada es: ¿Qué pasa con esto? Quien en pleno reinado se encargó de comprar y corromper a los medios de comunicación, hoy hasta tiene un programa radial para hacer demagogia desde Japón. Si mañana regresa, casi seguro vuelve a ganar las elecciones.

Tres ex mandatarios de muy dudosa honestidad acaban de regresar a Ecuador. Y no sé por qué nos asombramos, si ya se va convirtiendo en un hábito que la alta clase política latinoamericana meta las manos hasta el codo, luego meta la pata, y al final ponga pie en polvorosa. He aquí la fórmula: robar unos millones de aquí y allá, negociar por lo bajo bienes del Estado, remover cortes jurídicas y carteras ministeriales de manera inconstitucional, y cuando la cosa se pone fea o llega el siguiente gobernante con sus comisiones investigadoras y se abren procesos judiciales, a salir corriendo.

A veces es de lo más pintoresco: el peruano Alan García corrió por los tejados. Otros tienen un estilo menos sensacional y más cínico, como Fujimori que dijo iba a dar una vuelta de un par de días al Japón y se llevó un avión de maletas de dinero: todavía lo están esperando para hacerle juicio. Y para completar la fórmula, como dice la canción: todos vuelven. Entre la amnesia histórica y los tribunales parcializados estos distinguidos delincuentes consiguen siempre regresar a sus países y volver a las andadas. La cereza del pastel de la complicidad suele ponerla la muchedumbre de electores y partidarios.

Hace poco Hugo Chávez ganó un dudoso referéndum. Estoy seguro de que no pasará mucho tiempo sin que asistamos a una versión del retorno del rey Fujimori, pero mientras tanto nos podemos ir entreteniendo con Bucaram recargado. Alan García trabaja en Lima, muy cerca de su reelección y ya nadie se acuerda de la inflación monstruosa y de todo lo demás. Siguiendo la procesión, el ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa entró en escena el domingo 3 de abril, después de un reconstituyente asilo en República Dominicana. Y luego el ex vicepresidente Alberto Dahik, que andaba por Costa Rica, completó la trilogía de prófugos que han logrado retornar tras ser anulados los juicios que pesaban en su contra.

Ante este desastroso mapa de impunidad vale la pena pasarnos del lado del hombre común y silvestre latinoamericano, para entender qué pasa. Todos los caminos me conducen a parafrasear un verso del asesinado poeta salvadoreño Roque Dalton: “El problema ya no es la nación ajena, sino la enajenación”. El hecho de que un atentado de Sendero Luminoso arranque reclamos por el dictador Alberto Fujimori indica que el mecanismo suele ser un *remake* del viejo asunto del enemigo único. No hay nada como el cultivo de ciertas fobias naciona-

les para hacer que las muchedumbres acepten la mano dura del líder absoluto. Y los presidentes mitómanos y corruptos suelen saber esto desde que nacen a la política.

He aquí una primera causa: el miedo a un enemigo único, que puede ser interno (como en el caso del Perú con el fantasma del terrorismo), o externo (como en el caso de Venezuela con la virtual invasión Bush). Ahora bien ¿Por qué se convierte en algo indisociable la figura del dictador con la del paladín que salvaguarda al pueblo de este enemigo? Es curioso que grandes sectores de la población no se planteen la siguiente pregunta: ¿Por qué no se combate el terrorismo o se protegen las fronteras o se evita cualquier otro mal desde la aceptación de las estructuras democráticas?

Este enemigo único –como afirmaban Allport y Postman– aunque puede tener fundamentos más o menos ‘reales’, está hecho de la sustancia del mito y de la manipulación política, y pasa incluso por la construcción mediática y las fobias nacionales. El hecho de preferir un dictador de mano dura a estructuras institucionales democráticas, nos lleva a una segunda causa de esta aceptación: el paternalismo institucional y la falta de responsabilidad política y de cultura cívica del pueblo. La gente empieza a temerle al regreso de un exilio radical que se va a tomar no se sabe qué revanchas, a una invasión norteamericana, a la ola de terrorismo interno o a alguna inflación inexplicable de épocas pretéritas. Entonces ocurre un curioso fenómeno que se parece al complejo de Electra trasladado al cuerpo social: la muchedumbre se enamora del padre, comienza a aceptar que el presidente se comporte como un padre disciplinante e incluso caprichoso. Total, así son los padres (léase presidentes) pero todo lo hacen por nuestro bien: nos protegen de algo que a veces ni siquiera está muy claro, pero algo es algo.

Conozco muchos pequeños empresarios peruanos y ecuatorianos. Repito, eso que llamamos superficial y comúnmente gente bien intencionada, capaces de impartir justicia en sus estrechos márgenes de poder, e incluso de ayudar al prójimo desinteresadamente, que sin embargo no se cansan de añorar dictadores pretéritos y corruptos. El argumento suele ser siempre más o menos el mismo: con aquel estábamos mejor. Y cuando uno replica que Fujimori, entre otras cosas, robaba, la respuesta estandarizada es que igual todos los presidentes

roban. Cuando la gente manifiesta su nostalgia de Pinochet agradeciéndole todo el bien que le hizo a la economía, y uno dice que el General, entre otras cosas, era un dictador y mataba, los defensores suelen replicar que casi todos los presidentes hacen esas cosas. ¿Todos los presidentes roban y hacen ‘esas cosas’? ¿Dónde?

Detrás de esta postura, sospecho que se esconde una tercera causa no menos significativa que las anteriores: el oportunismo económico de las clases medias ante la corrupción. Todo Estado corrupto necesita de cómplices, y cuantos más, mejor. En este caso el precepto de la arquitectura racionalista se invierte: más no es menos; sencillamente, a mayor cantidad de implicados, más posibilidades hay de anquilosar y perpetuar la corrupción. Más posibilidades hay de quedar impune y de ‘cubrirse’ los unos a los otros.

Por eso gobiernos como el de Fujimori o Noboa han propiciado que el desajuste fiscal, los sobornos, la evasión de impuestos, los privilegios mercantiles, abarquen a grandes sectores de la clase media empresarial. Por eso esta ‘buena gente’ de pequeñas empresas se siente tan a gusto y prosperan con el dictador de turno, y luego sienten nostalgia cuando éste sale huyendo. Y lo que es peor, allí están, deseosos de engrasar otra vez el perverso engranaje cuando el prófugo regresa. Por eso es tan peligroso que el díscolo ex mandatario vuelva al lugar del delito.

Lo curioso es que con el demócrata de turno (pongamos por caso Alejandro Toledo) si no hace las cosas bien, las muchedumbres, en lugar de buscar una salida democrática a la crisis, sienten una irrefrenable nostalgia del dictador perdido. Así vamos, y que regrese el chino. Pero ya se sabe que las muchedumbres suelen ser ruidosas y ruinosas, de modo que esta absurda complicidad antidemocrática genera permanentes pérdidas en los países latinoamericanos. Lo que muchos quieren ver como la solución del problema, es precisamente una de sus causas directas.

# Democratización y desigualdades en América Latina y el Caribe<sup>1</sup>

LAURENCE WHITEHEAD  
*Nuffield College, Oxford*

## RESUMEN

El tema central de este artículo es una paradoja. La paradoja de que América Latina y el Caribe son, tal vez, unas de las zonas del mundo de mayor progreso en el campo de la democratización, entendido éste de manera clásica y formal. Si la comparamos con África, con Asia, con los países ex-soviéticos, o con Oriente Medio, podemos comprobar que su desarrollo democrático ha sido estelar en los últimos 20 años. Sin embargo, en el terreno de la lucha contra la pobreza y las desigualdades agudas, esta región está en franco estancamiento e, incluso, en pleno retroceso. América es una región grande, un subcontinente, donde la pobreza y la injusticia social están tan (o más) arraigadas que la democracia y la libertad política. Y aquí radica la paradoja: en la contradicción entre estas dos realidades.

**Palabras clave:** Desarrollo democrático, Libertad política, Pobreza, Injusticia, Conflictividad social.

## ABSTRACT

The central subject of this article is a paradox: Latin America and the Caribbean are, perhaps, one of the zones of the world of greater progress in the field of the democratization, understood it in a classic and formal way. If we compared it with Africa, Asia, the ex-Soviet countries, or Middle East countries, we can verify that the Latin American democratic development has been stellar in the last 20 years. Nevertheless, in the land of the struggle against the poverty and the severe inequalities, this region is in a process of stagnation and, even, in a backward movement. America is a great region, a sub-continent, where the poverty and the social injustice are more rooted than the democracy and the

political freedom. And here is the paradox: the contradiction between these two realities.

**Key words:** Democratic Development, Political freedom, Poverty, Injustice, Social conflicts.

América Latina es un subcontinente donde (con la única excepción de Cuba) los regímenes políticos nacionales son clasificados uniformemente como democráticos, tanto por las agencias clasificadoras (Freedom House, etc.) como por la comunidad internacional y por la ciencia política. Y, sin embargo, el veredicto de sus propios ciudadanos y de sus electores es menos positivo y es difícil responder a la pregunta clave: ¿Qué democracia es ésta, que no ofrece perspectivas de avance contra las graves desigualdades e injusticias?

Conviene reseñar el reciente informe de la OIT, dirigido por Juan Somavia, sobre la situación del empleo en el mundo. Según sus cifras, en el año 2003 la mitad de los trabajadores mundiales (1.400 millones de los 2.800 millones en todo el mundo) ganaron menos de 2 dólares diarios y el 20 por 100 (550 millones) no llegaron a un dólar por día. En números absolutos, estas cifras son las más altas de la historia. Pero en proporción a la fuerza de trabajo mundial, los trabajadores «pobres» (los de 2 dólares diarios) bajaron del 57 por 100, en 1990, a 50 por 100, en 2003, y la perspectiva es de un 40 por 100, en 2015. La Meta del Desarrollo se plantea reducir esta proporción a la mitad, es decir, del 57 por 100 al 29 por 100.

A nivel global podemos observar una tendencia proporcional positiva. Pero en América Latina y el Caribe, el empleo productivo no creció en la misma proporción que el crecimiento de la población económicamente activa. En consecuencia, y a pesar del status «políticamente democrático», a partir de los años noventa, América expulsó un porcentaje importante de su mano de obra, hacia EEUU y Europa principalmente, y dejó a muchos de sus jóvenes desocupados o sobreviviendo en la precariedad. Ésa fue una de las causas de que no mejorara ni el ingreso per cápita, ni los índices de pobreza absoluta, ni los coeficientes gini (de desigualdad de ingresos). Por supuesto, ha habido mejorías en algunos países –como Chile– pero se ha compensado con el deterioro en otros –como Argentina–. En términos

generales, la clase media sufrió intensas presiones y los trabajadores no cualificados tuvieron que competir intensamente en trabajos de mala calidad. Los de más avanzada edad y los demasiado jóvenes han tenido que hacer frente a condiciones de vida y de trabajo desesperantes.

Si a nivel global ha habido –y va a seguir habiendo– mejoras relativas, están motivadas por el crecimiento acelerado de algunos países asiáticos (sobre todo de China) unos países que, por otra parte, no necesariamente tienen gobiernos democráticos. Y, sin embargo, en América Latina y el Caribe democráticos lo que ha prevalecido, y lo que tal vez va a prevalecer, es una desigualdad casi sin par y, posiblemente, un estancamiento en la generación de empleo de calidad.

En mi breve comentario quiero analizar cinco puntos, relacionados con esta falta de congruencia entre el status político y el retraso socio-económico del subcontinente: a) temas conceptuales; b) problemas estadísticos de medición; c) una distorsión tecnocrática de los años noventa, que hay que corregir; d) la necesidad de tolerar un cierto grado de conflictividad social, para absorber las tensiones entre libertad y progreso; e) la virtud, en este contexto, del principio de la universalidad, como principio no sólo de derecho político, sino de fundamento material para la ciudadanía democrática.

### **ASPECTOS CONCEPTUALES**

Creo que es un error conceptual y político hacer una separación demasiado grande entre el fenómeno de la pobreza generalizada y la realidad de las agudas desigualdades. Sabemos que no son lo mismo y que, por ende, está justificado hacer un tratamiento diferenciado. Pero son fenómenos muy estrechamente relacionados (sobre todo en el contexto de elecciones competitivas) e interactúan entre sí, en el contexto de una América Latina fragmentada y socialmente tan poco equitativa. Hay algunas variantes, tanto de la pobreza como de la desigualdad que son social y políticamente aceptadas por la mayoría, pero hay otras que son totalmente ilegítimas, desde la perspectiva de la ciudadanía. Hay que diferenciar entre, por ejemplo, la aceptación de ciertos contrastes entre las condiciones de una vivienda mínima en el campo y en la ciudad, y otras totalmente inaceptables, como la exclusión de la educación primaria. Por eso hay que analizar las diversas dimensiones de discriminación y de desigualdad, en el campo de la salud, la educación, las cuestiones de género, los grupos étnicos, y no

sólo el ámbito del ingreso monetario. También hay que tener en cuenta que la pobreza afecta a las familias, a comunidades enteras, y no sólo a individuos aislados. En consecuencia, esta multidimensionalidad y esta interpenetración entre pobreza y desigualdad hay que manejarlas con políticas sociales, de una manera participativa y no simplemente tecnocrática.

Una gran mayoría del electorado latinoamericano vive diariamente la realidad de la vulnerabilidad económica y de la inseguridad social. Los estudios antropológicos nos indican que muchos ciudadanos pasan, en un año, del status de trabajador promedio al de marginado (menos de dos dólares por día); y no una vez, sino varias veces. Su status no es necesariamente de pobreza permanente, sino de temor permanente, por la posibilidad de caer en la pobreza. Ésa es la experiencia en un país con un mercado de trabajo precario.

Pero no hay que pensar en los pobres como un sector aparte, administrable burocráticamente a través de la «focalización». Si el sistema político democrático no logra reconocer que son las mayorías normales las que se enfrentan a la pobreza, esa desatención degenera en el desencanto e, incluso, en la desesperación de los electores, que perciben a sus gobernantes y a la partidocracia insensibles, elitistas y excluyentes.

### **PROBLEMAS DE MEDICIÓN**

El enfoque tecnocrático de la «focalización» descansa en el supuesto de confiabilidad de los datos estadísticos utilizados para identificar a los beneficiarios de las políticas a favor de la erradicación de la pobreza. En algunos casos (por ejemplo, la «bolsa escolar» brasileña) es posible la fiabilidad. Pero, en general, las herramientas técnicas no son confiables ni exactas. Un estudio reciente, el *Do We Know How Much Poverty There Is?*, de Oxford Department Studies (Vol. 32, No. 4 December 2004) concluye que la pobreza en América Latina, en 1996, se estimó razonablemente en el 50,7 por 100, de un total de 243,5 millones de personas. Pero algunos supuestos técnicos dentro de márgenes también razonables, indican que la proporción podría ser del 66 por 100. Igualmente, con otras variaciones razonables, se podría bajar la estimación hasta el 20 por 100 (p. 547). En relación con la posición de los 17 países estudiados, no es difícil identificar a Bolivia entre los más pobres y a Costa Rica entre los menos.

De los «rankings», un 30 por 100 son invariables, independientemente de las técnicas de estimación utilizadas (ibid, p. 545) y algunos de los grupos sociales tienen puntos de referencia y comparaciones que distan mucho de ser homogéneos. Los pobres, por ejemplo, con vínculos familiares en los Estados Unidos tienen una pauta de consumo distinta a los que no tienen acceso a este mercado. También, como ha demostrado últimamente Amartya Sen, en UNDP Human Development Report 2004, no todos los individuos tienen las mismas necesidades de ingreso para hacer frente a sus gastos esenciales. Cerca del 10 por 100 de la población puede ser clasificado como «incapacitados» y éstos tienen más necesidades y menos posibilidades de lograr un ingreso mínimo.

### **CORRECCIÓN DE DISTORSIONES TECNOCRÁTICAS**

A la luz de estas observaciones conceptuales y empíricas, hay que cuestionar la ilusión tecnocrática de que se puede lograr una política social de «focalización» neutral, exacta y despolitizada. Esto no significa que haya que volver atrás y hacer una política social costosa, irracional e incapaz de llegar a los más pobres, sino reconocer que en los años noventa hubo una tendencia a exagerar las posibilidades de la focalización, puramente técnica. En una democracia con electores pobres y vulnerables en una elevada proporción, las grandes mayorías tienen que estar convencidas de la justicia de la política social. Un sistema legítimo e inteligible puede generar apoyo popular y unir voluntades para la generación de recursos que se dedican a la solidaridad social. Pero ese sistema no puede ser demasiado burocrático ni aislado del debate público. Tiene que surgir y tener su fundamento en el diálogo político dentro de una sociedad democrática. Si los tecnócratas excluyen este tema de la discusión popular, pueden socavar el apoyo necesario para esa política social y provocar desencanto hacia el sistema político en general.

### **NECESIDAD DE TOLERAR UN CIERTO GRADO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL**

El combate contra la pobreza y la desigualdad no debe ser un proyecto exclusivamente técnico. Tiene que ser negociado y manejado políticamente, dentro de un contexto democrático y no puede negársele (y mucho menos suprimir) su conflictividad. Pero admitir y reconocer los elementos inevitables del choque de intereses no significa caer en el populismo o en la ingobernabilidad. Al contrario, la

democracia ofrece la oportunidad potencial de procesar los conflictos subyacentes de una manera saludable. Si la democratización de sociedades muy desiguales y con mucha tradición de injusticia corre el riesgo de hacer primar determinados intereses y de movilizar a unos grupos que antes estaban atomizados, también es posible reconvertir a esos mismos grupos y transformar sus resentimientos en apoyos públicos y en acciones potencialmente responsables. De esta manera, se pueden convertir los conflictos latentes y negativos («suma cero») en conflictos creadores («suma positiva»). Es posible difundir una ética de la responsabilidad, un sentimiento de la cosa pública como propiedad compartida. En una palabra, se puede fomentar la gobernabilidad democrática, a través de la tolerancia y del manejo inteligente de la conflictividad social. Es cierto que no hay soluciones mágicas y que no hay garantías de un éxito automático. Pero hay casos alentadores (por ejemplo, la evolución y el aprendizaje del PT brasileño) y hay una potencialidad que hay que fomentar. Los demócratas no deben asustarse frente a las demandas que surgen desde abajo.

#### **PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD**

Uno de los elementos claves para ayudar en el proceso de gobernabilidad democrática, en un contexto de desigualdad e injusticia, es insistir en el principio de universalidad. Este principio es la base de la práctica de la democracia política. Cada individuo tiene su voto, su autonomía y su derecho, que pesa igual a los demás. Es el principio de la ciudadanía universalizada. Y no se puede limitar este principio a las actividades puramente políticas. Voy a poner un ejemplo: los que no tienen las condiciones materiales mínimas para ejercer su voto (por hambre, etc.) estarían excluidos del proceso democrático y de sus ventajas supuestamente universales. Por eso, todos los electores y ciudadanos deben tener derecho a un apoyo colectivo mínimo, necesario para su participación. En una sociedad muy pobre el mínimo sería muy bajo, pero absolutamente necesario, porque lo que no se puede negar es el principio. Con más prosperidad sería posible mejorar el nivel mínimo de este *safety net*, pero eso es algo que se puede decidir democráticamente. Sin embargo, el principio de universalidad es necesario integrarlo en el concepto mismo de gobernabilidad democrática.

Para terminar, y para ilustrar mi tesis, los latinoamericanos deberían aprender algo de la democracia más grande del mundo: la India.

El nuevo gobierno indio va a introducir una ley para garantizar un ingreso mínimo a cada familia. Según esta ley, un miembro de cada familia tendrá derecho legal a 100 días de trabajo pagado por el Estado, de acuerdo con el sueldo mínimo diario. El costo fiscal sería entre 0,5 por 100 y 1 por 100 del PIB y el impacto sobre la pobreza absoluta en el campo será muy grande. Si un país tan dividido en castas y tan agrícola como la India puede adoptar tal medida, ¿una medida similar es realmente tan inalcanzable en una América Latina democrática? Hay indicios, incluso en países como Bolivia (el bonosol), de que ese principio de la universalidad debe extenderse. Pero si, en los hechos, nuestra América tarda en tomar esa decisión, va a seguir reforzándose su posición como la región más democrática, pero menos justa, del mundo moderno y ésta no es la mejor manera de avanzar en el camino de la gobernabilidad consensuada.

## REFERENCIAS

---

C. Binetti y F. Carrill (eds.), *¿Democracia con desigualdad?* (BID, Washington, 2004).

Richard Kohl (ed.), *Globalization, Poverty and Inequality*, (OECD Development Centre, París, 2003).

T. Mkwandawire (ed.), *Social Policy in a Development Context*, (UNRISD, Ginebra, 2004).

Amartya Sen, *Development as Freedom* (OUP, 1999).

Miguel Szekely, Nora Lustig, Martin Cumpa y José Antonio Mejía «Do We Know How Much

Poverty There Is?», *Oxford Development Studies*, Vol. 32, No.4 (Diciembre 2004).

UNDP, *Human Development Report*, 2004 (Oxford University Press, 2004).

Laurence Whitehead, «Chronic Fiscal Stress and the Reproduction of Poverty and Inequality in Latin America» en Victor Bulmer-Thomas (ed.), *The New Economic Model in Latin America and Its Impact on Income Distribution and Poverty* (Macmillan, 1996).

# Perfiles *Latinoamericanos*

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México

# 26

Julio-Diciembre  
2005

S E C C I Ó N V A R I A

*Rendición de cuentas y el estado de derecho en la consolidación de las democracias*  
SUSAN ROSE-ACKERMAN

*Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas del Estado*  
SILVIA INCLÁN Y MARÍA INCLÁN

*Análisis de los resultados de México en el PISA-2003: una oportunidad para las políticas públicas*  
CARLOS MUÑOZ IZQUIERDO

*Trabajadores iberoamericanos en el Estado español a comienzos del siglo XXI*  
JOSÉ ANTONIO ALDREY VÁZQUEZ Y ROSA M<sup>a</sup> VERDUGO MATÉS

*Hacia una teoría económica institucional de la política económica española*  
GONZALO CABALLERO MIGUEZ

*Entre la equidad distributiva y la legitimidad política: el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en Argentina*  
JOSÉ DEL TRONCO PAGANELLI

*El retorno del general. El bussismo, la otra cara de la democracia argentina*  
JULIO AIBAR

E N S A Y O

*Sócrates y Edivaldo Araújo.  
Performance en la plenaria del  
Senado. Brasilia, 17.03.04*  
TEREZA VIRGÍNIA RIBEIRO BARBOSA  
Y MARCOS ANTÔNIO ALEXANDRE

R E S E Ñ A

*Mujeres y política en el Uruguay  
de Rodolfo Gonzalez Rissotto*  
POR BERTHEZ SILVA ABILENDA

*Reseñando a la VIACUSO-México en  
sus 30 años: un reporte inicial  
sobre los egresados*  
POR ÚRSULA ZURITA